

B.1949.1

Ciudadano

En consideración a que en diversas regiones del país y con posterioridad al 24 de noviembre pasado, propietarios de grandes extensiones de tierra aprovechándose de la situación creada, han reincidido en sus viejas prácticas de desalojar a los campesinos de las parcelas que desde años venían cultivando, fomentando con tales atropellos la zozobra y el malastar en la población campesina y la disminución de la extensión de las áreas por sembrar con la consiguiente reducción del abastecimiento del país en artículos alimenticios, en mi propio nombre como ciudadano en uso de derechos constitucionales y en representación de numerosos campesinos desalojados que he requerido mis servicios profesionales, me dirijo a esa Junta para exponer:

1- El 15 de junio de 1.944 el Ejecutivo Federal dando cumplimiento a lo ordenado por la Constitución de 1.936 en lo referente a la protección que el Estado debe impartir a la población campesina y con la finalidad de propender al aumento de la producción agrícola, dictó un Decreto prohibiendo los desalojos de campesinos que cultivaban parcelas mediante contratos de arrendamiento o como simples ocupantes. Los beneficios reportados al país con tal medida tanto en lo que se refiere a los inmediatos intereses de la mayoría de la población, el campesinado, como en lo relativo al incremento del abastecimiento de artículos alimenticios, determinó que no obstante los manejos de algunos líderes acción-democratistas para que fuera derogado, la Asamblea Nacional Constituyente lo rectificara el 4 de marzo de 1.947, promulgando el Decreto "Sobre Arrendamientos y Desalojos de Predios Rústicos".

2- En su Acta Constitutiva esa Junta se obligó a garantizar como ordenamiento jurídico la Constitución de 1.936 reformada en 1.945 y las Leyes y Decretos legislativos y ejecutivos en vigencia hasta el 24 de noviembre de 1.948 que expresamente no fueron derogados por el nuevo Gobierno.

3.- Las relaciones, por tanto, entre los grandes ~~hacendatarios~~ propietarios de tierra y los campesinos que en ellas cultivan parcelas, ya mediante contratos de arrendamiento o como ocupantes, se rigen por el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 4 de marzo de 1.947.- El alcance de la suspensión de garantías encuéntrase determinado y limitado por los correspondientes artículos de la Constitución de 1.936, reformada en 1.945, en la que esa Junta apoya su actuación. No autorizan esos artículos, como tampoco la doctrina, a que las autoridades encargadas de cumplir y velar porque se cumplan las leyes, por estar suspendidas las garantías, cumplan su misión en forma discriminada, es decir, apliquen y hagan cumplir algunas leyes del ordenamiento jurídico vigente y dejen de cumplir otras, o con su actuación autoricen su violación por determinados ciudadanos.- Y es lo que está ocurriendo en el interior del país, en donde las autoridades no sólo se abstienen de hacer cumplir por los propietarios de tierra el citado Decreto "Sobre Arrendamientos y Desalojos de Predios Rústicos" sino que algunas de ellas alientan a esos propietarios a violar las leyes al no impedirles y sancionarlos cuando echan ganado sobre las sembreras de los campesinos y al negarse a dar curso a las quejas y denuncias de los campesinos contra tales atropellos en sus personas y bienes.

4- La deficiencia en cuanto a los recursos administrativos para impedir o sancionar actos de funcionarios públicos violatorios de las leyes; lo tardío y costoso de los recursos judiciales para proteger a los campesinos en sus derechos de ocupantes contra los desalojos prohibidos por el Decreto "Sobre Arrendamientos y Desalojos de Predios Rústicos"; la evidencia de que no se trata de casos particulares a mis clientes, sino de un estado de hecho general y que en todo el territorio de la República afecta los intereses nacionales, exige que se tomen, con la urgencia debida, las medidas necesarias para que sean amparados los derechos adquiridos por los campesinos y se ponga cese a los atropellos de que están siendo víctimas. A tal efecto me dirijo a esa Junta para pedir;

A.- Que sea girada circular a las autoridades estatales, distritales y municipales haciéndoles saber que el Decreto Sobre Arrendamientos y Desalojo de Predios Rústicos está en vigencia y por consiguiente, que deben proceder a cumplirlo y a velar porque lo cumplan los ciudadanos a quienes compete;

B.- Que se ordene la inmediata reinstalación de los campesinos desalojados en las parcelas que estaban cultivando y sean indemnizados por los perjuicios que se hayan ocasionado tanto a ellos como ~~xx~~ a los que sin haber sido todavía desalojados se les ha perjudicado al echar ganado sobre sus sementeras.- Es justicia.-Caracas; veintidós de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.-

SALVADOR DE LA PLAZA